Plaza pública

▶ ¿Qué pasa con la carne?
▶ Fuerza política de ganaderos

Miguel Angel Granados Chapa

Llame usted por teléfono, solicitando gas, y siéntese a esperar. Pasará una semana tras otra sin que la entrega correspondiente sea realizada. Busque entonces indagar la causa de la demora, y se enredará en un lío del que resulta imposible salir: los distribuidores culpan a Pemex, Pemex a los distribuidores, cada uno muestra que no puede ser suya la responsabilidad y todo queda lo mismo. A fin de cuentas es el usuario el que carece del servicio, donde quiera que recaiga la causa de la escasez.

Es peor, sin embargo, lo que está sucediendo con la carne. Hay poca en el mercado, y la que hay es cara. Aquí, la indagación sobre las causas del problema se topa con marañas más incomprensibles, porque la red de intereses en juego es más tupida. Pero aun si nos quedamos en los sucesos más inmediatos seguimos sin entender mucho lo que está pasando.

El lunes pasado, por ejemplo, el regente de la ciudad, profesor Carlos Hank González, anunció un compromiso con los ganaderos, por el cual éstos se obligaron a surtir mil cabezas de ganado adicionales a las del abasto normal en la ciudad de México, con objeto de eliminar la especulación que viene practicándose con este producto. El envío extra debería empezar a tener efectos el jueves pasado. No llegó una sola res remitida por los ganaderos suscriptores del convenio. Por lo tanto, de dos mil expendedores de carne al público que se presentaron en Industrial de Abastos a comprar el producto, sólo 700 vieron satisfechos sus pedidos.

Usted dirá que dos días —jueves y viernes— son un plazo muy corto para saber si los ganaderos están cumpliendo su compromiso o no. Rigurosamente hablando, es claro que están faltando a él. Aun si hoy lunes el pacto empezara a ser observado, ya se habría comenzado mal,violándolo, a pesar de que los ganaderos obtuvieron contraprestaciones importantes, como un crédito de 30 millones de pesos que, a pesar de la inflación, son todavía muchos pesos. Es todavía más grave el que intenten, como al parecer están haciendo, *decir* que ya *hacen* lo que no están haciendo todavía, para capitalizar políticamente su aparente respuesta "al llamado del presidente López Portillo". Por ejemplo, así ha procedido el líder de la Unión Regional Ganadera de Chihuahua, quien el viernes anunció que fueron enviados al Distrito Federal veinte mil kilos de carne en canal. Su apoyo a las medidas oficiales no es, por supuesto, originado por el más acendrado patriotismo, sino que se plantea también como un toma y daca: sólo en esa entidad hay doscientas mil cabezas de ganado en espera de ser exportadas, para lo cual se requiere la autorización de la Secretaría de Comercio, pues los productores de ganado siguen insistiendo en que les conviene mucho más vender fuera su mercancía, toda vez que los precios tope fijados por la Secom están por debajo de los costos de producción, según el dicho de los ganaderos.

Si éstos se mueven con la impunidad de que dan muestra a cada rato (al firmarse el convenio hace una semana se habló de sanciones que todavía no se ven por ninguna parte aunque ya se incurrió en las causas que permitirían actualizarlas) es porque a la importancia de su actividad en el ámbito económico agregan una fuerza política organizada de primera magnitud. El actual presidente de la Confederación Nacional Ganadera, Arturo de la Garza, ha sido diputado federal —por supuesto en representación del PRI— y es miembro promienente del equipo del gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, e incluso formó parte de un frustrado comité de lanzamiento que hace siete años quiso *madrugar* para imponer a AMD, entonces caído en desgracia. La CNG ha solido tener varias posiciones en el Congreso, característica que sólo corresponde a los organismos gremiales de gran peso específico dentro del partido gubernamental.

De una situación como ésta surge el nudo de contradicciones que el gobierno no puede romper, porque no suele ser extraño que las propias autoridades encargadas de regular mercados y precios estén vinculadas por la vía partidaria con los productores cuya actividad pretenden formalmente encauzar.